LA CIRCULACIÓN DE ARMAS PEQUEÑAS EN CENTROAMÉRICA*

ARMAS PEQUEÑAS, GRANDES PROBLEMAS

WILLIAM H. GODNICK

INFORME PRESENTADO DURANTE LA CONFERENCIA SOBRE ARMAS PEQUEÑAS Y LIGERAS EN CENTROAMÉRICA, ORGANIZADA POR EL MOVIMIENTO CRISTIANO PARA LA RECONCILIACIÓN DE SUECIA, CELEBRADA EN ESTOCOLMO, SUECIA, LOS DÍAS 18-19 DE MAYO DE 1999.

Postulante para el doctorado en Relaciones Internacionales y Estudios de Seguridad en la Universidad de Bradford (Inglaterra) y colaborador de la publicación Small Arms Survey (<http://smallarmssurvey.org>)

Aunque existiera buena información sobre el comercio ilícito de armas pequeñas que actualmente se lleva a cabo en Centroamérica solamente explicaría una pequeña parte del problema de la propagación y el abuso de estas armas en la región. Para comprender la problemática actual referente a las armas pequeñas en el istmo es también necesario examinar la distribución no comercial, el uso ilegal de armas legales y otros factores más. En este contexto se tiene que incluir a los países del Caribe, Colombia, el Estado mexicano de Chiapas y la frontera mexicano-estadounidense como parte de la región centroamericana por su geografía, relaciones comerciales y de inmigración.

Los conocimientos del Programa sobre Seguridad y Desarrollo (SAND), sobre la circulación de

armas en Centroamérica, no proviene de un enfoque institucional en el comercio de armas sino como consecuencia de tres aspectos de nuestro trabajo. Primero, nuestra documentación y análisis de los programas de entrega voluntaria de armas (PEVA) en El Salvador y Panamá nos ha permitido observar la cantidad y clase de armas entregadas por ciudadanos a cambio de ciertos beneficios y bajo amnistía total. Segundo, hemos tenido la oportunidad de entrevistar, formalmente e informalmente, a excombatientes, militares, policías y "mareros"ⁱ sobre este tema. Y tercero, desde nuestro instituto seguimos de cerca todos los artículos de la prensa centroamericana que mencionan la presencia o uso indebido de las armas pequeñas, con énfasis en sucesos involucrando armas bélicas como rifles de asalto, cohetes y granadas.

Prefiero no perder el tiempo resumiendo la historia de la Guerra Fría, los conflictos civiles y su participación en la proliferación de armas de guerra en Centroamérica. Investigadores sociales como Michael Klare y Christopher Louise han cubierto este tema bastante bien.ⁱⁱ Es inútil intentar echar la culpa a un país o grupo específico cuando circulan cientos de miles (tal vez millones) de armas en Centroamérica de fabricación estadounidense, israelita, belga, soviética, austríaca, brasileña, checa, yugoslava, española, francesa, italiana y coreana entre otras. Ahora, la comunidad internacional se da cuenta de los defectos de los programas de desarme de la ONU y otras instituciones internacionales que solamente logran recuperar una pequeña parte de las armas de guerra en circulación. Un buen ejemplo de estas deficiencias es el proceso de desarme en Guatemala que solamente logró la recolección de 1,800 armas del URNG después de tres décadas de guerra.ⁱⁱⁱ Al mismo tiempo la sociedad civil guatemalteca sabe muy poco sobre los 16,000 rifles F-1 y F-2 distribuidos a las patrullas de autodefensa civil (PAC) por el ejército durante los años 80.^{iv} La gran disponibilidad de todo tipo de armamento en El Salvador, Guatemala y todos los países del istmo es el factor más importante para entender el tráfico de armas en la región. Son muy pocas las armas fabricadas en Centroamérica^v, y por eso, la existencia de grandes inventarios de armas dejadas por

* Este artículo fue publicado originalmente por el Centro para la Paz y la Reconciliación de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano con el apoyo de la Fundación Ford, en su página web (<http://www.arias.or.cr>). La Fundación Arias y el autor han otorgado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el permiso correspondiente para reproducirlo en este número del Órgano Informativo.

i Mareros son los integrantes de las pandillas juveniles conocidas como maras en El Salvador y otros países vecinos.

ii Véase 1) Michael Klare y David Anderson, *A Scourge of Guns: The Diffusion of Small Arms and Light Weapons in Latin America, Arms Sales Monitoring Project of the Federation of American Scientists*, (Washington DC, 1996). 2) Christopher Louise, *Light Weapons in Central America: A Preliminary Report of the Militarisation of Civil Society in El Salvador, Guatemala and Chiapas, research note prepared for the British American Security Information Council's Project on Light Weapons* (Londres, julio 1996).

iii Informe de MINUGUA sobre el desarme del URNG, 1998.

iv Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Capítulo 7 «Inseguridad Ciudadana», Informe de PNUD Guatemala 1998, (Guatemala, marzo 1998), p. 27.

v El ejército guatemalteco tiene una fábrica de armas y municiones en el departamento de Petén.

la Guerra Fría debe ser analizada en combinación con seis factores ambientales:

1. Por toda la región las fronteras son porosas, mal marcadas y difícil de vigilar por la geografía y falta de capacidad y recursos.
2. Las zonas de libre comercio y la banca de ultramar en Panamá, Gran Caimán y otros países del Caribe facilitan los negocios al margen de la ley.
3. El aumento en el narcotráfico que utiliza pistas clandestinas de aterrizaje en todos los países centroamericanos es difícil de separar del nuevo comercio ilícito en armas pequeñas.
4. Empleados públicos de todos niveles se corrompen fácilmente debido a los bajos sueldos frecuentemente retrasados, y poca oportunidad económica en la región.
5. Los recursos destinados a la desmovilización y reinserción de los excombatientes no fueron suficientes para su reincorporación a la sociedad civil.
6. Las nuevas fuerzas de seguridad pública, en su transición desde mandos militares a civiles, no han podido enfrentar el aumento de la violencia común debido al poco tiempo de preparación y la dificultad que han tenido en formar nuevos efectivos.

Teniendo en cuenta estos factores,

quiero empezar este análisis sobre la circulación de armas pequeñas en América Central enfocándome en cinco áreas: la recirculación de inventarios dejados por la Guerra Fría; la narcoactividad; la industria de seguridad privada; el comercio legal de armas pequeñas y el control de las armas en posesión de los gobiernos.

La recirculación de inventarios dejados por la Guerra Fría

Investigadores y expertos estiman que circulan alrededor de 2 millones de armas ilegales en Centroamérica. Las evidencias sugieren que la mayor parte de ellas fueron introducidas durante los años de conflicto armado. En el caso salvadoreño, entre 1982-1991, el gobierno estadounidense regaló 33,274 rifles de asalto M-16, 3,120 lanzagranadas 40mm y 267,000 granadas de fragmentación.^{vi} Si alguien fuera a fiscalizar estos regalos dudo que podría encontrar documentación sobre estas armas. Durante mi observación de una jornada del programa «Bienes por Armas de Fuego», en San Salvador en julio de 1998, observé que aproximadamente 20% de las armas entregadas eran rifles de asalto M-16 claramente marcadas «Property of United States Government». Aunque el gobierno estadounidense introdujo muchas de estas armas es posible también que llegaran recicladas de Vietnam o de otro conflicto centroamericano.

Varias veces al año personas particulares y las autoridades encuentran arsenales de armas abando-

nadas u olvidadas, aparentemente pertenecientes al FMLN de El Salvador, en alguna vecindad de Managua o San Salvador. En febrero de 1999, cerca de Managua, la policía encontró un buzón con municiones para fusiles, más de dos mil kilos de TNT, espuelas de granadas fragmentarias y lanzacohetes entre otros.^{vii} En julio del año 1998 la policía nicaraguense encontró 600 RPG-7 y rifles de asalto atribuidos al FMLN. Poco después en el departamento salvadoreño de La Libertad, la PNC de El Salvador encontró un buzón bajo tierra que contenía once fusiles M-16, G-3 y Galil, un lanzagranadas, cinco submetralladoras, cinco pistolas, una escopeta calibre 12mm, dos revólveres, 148 bloques de TNT y una gran cantidad de material explosivo.^{viii} Varios meses antes, en mayo de 1998, un militar hondureño fue arrestado en Tegucigalpa por tener 167 rifles de asalto en su casa sin ninguna documentación.^{ix} Las armas han cambiado de manos tantas veces que sería absurdo intentar decir a quienes pertenecían. El problema es que los arsenales olvidados siguen apareciendo y muchas veces son civiles quienes los encuentran y no las autoridades indicadas.

La recirculación de armas en Centroamérica parece haber tenido su impacto en el estado mexicano de Chiapas. El gobierno mexicano acusó a excombatientes salvadoreños, en agosto del año pasado, de haber exportado armas a Chiapas después de encontrar a mercenarios salvadoreños operando en su territorio.^x El mismo día en El Salvador, la Policía Nacional

vi Lora Lumpe, «*Leader of the Pack*», *Bulletin of Atomic Scientists: Small Arms, Big Problem*, Educational Foundation for Nuclear Science, (Chicago, enero 1999), p. 28.

vii Rafael Cerna, «Encuentran armas del FMLN en Nicaragua», *El Diario de Hoy*, San Salvador, 12 febrero 1999.

viii Jaime García, «Hallan más armas en terreno donde estuvo plagiado Súster», *El Diario de Hoy*, San Salvador, 22 julio 1998.

ix Associated Press, «Ex jefe militar enfrenta juicio por poseer armamento ilegal», *La Nación Digital*, San José, 25 mayo 1998.

x Bernardo Valiente, «Investigarán apoyo salvadoreño a zapatistas», *La Prensa Gráfica*, San Salvador, 11 agosto 1998.

Civil (PNC) decomisó y destruyó un arsenal de 56 granadas, 64 proyectiles y 4 morteros que supuestamente fue un viejo cache del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). A comienzos de 1998 dos militares hondureños fueron procesados por el gobierno mexicano por proveer armas a los Zapatistas en 1994.^{xi} Armas y mercenarios de origen centroamericano continúan cruzando la frontera mexicana.

También podemos ver el problema de la recirculación de viejos inventarios con la frecuencia del uso de granadas contra civiles en los buses de Guatemala y los barrios de San Salvador. Con la excepción de las granadas hechizas, no se fabrican estos artefactos en Centroamérica. En Guatemala, el proyecto de desminado ejecutado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Junta Interamericana de Defensa (JID) da igual importancia a la recolección de granadas y otros explosivos que a la detección y remoción de minas por su extensa proliferación en zonas de posguerra.^{xii}

En este contexto reitero que, desde mi punto de vista, la recirculación y redistribución de armas presentes en la región desde hace años es el factor principal que contribuye a la disponibilidad de armas en Centroamérica. Es difícil averiguar su origen exacto porque muchas armas tienen el número de serie limado. Lo importante de notar aquí es que esta disponibilidad hace mucho más fácil la delincuencia común que se está viviendo y los masacres como él que ocurrió en

Acteal, Chiapas en diciembre de 1997.

La narcoactividad

Es bien reconocido que la infiltración de la DEA en las redes colombianas y la vulnerabilidad económica de los países centroamericanos han dado las condiciones para que la región sea un punto de tránsito importante en el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. En muchos sentidos es difícil separar el tráfico de drogas del tráfico en armas. El investigador Christopher Louise señala que los dos son productos de alto valor y baja densidad aunque la relativa abundancia de armas en el istmo refuta ese argumento un poco.

Puedo dar un testimonio personal respecto al incremento del narcotráfico en Centroamérica durante los últimos cinco años. No me puedo explicar de otra forma la proliferación de tiendas llenas de productos importados, mansiones en barrios marginales y la construcción de tantos hoteles de lujo cuando estos países tienen altos niveles de deuda externa y pocas divisas con que pagarla. El *crack* (cocaína en piedra) ha tomado control de grandes segmentos de la juventud salvadoreña desde los comienzos de las deportaciones de los infractores que residían en los EEUU. Además parece que los traficantes ahora pagan una parte en drogas y otra en armas. No hemos visto ni la superficie de esta crisis de violencia y adicción en la juventud salvadoreña.

Las armas que llegan como parte

de este comercio provienen de fuentes nuevas en los EEUU y Sudamérica tanto de inventarios reciclados por el involucramiento de excombatientes y militares. Sin embargo, parece que la mayoría siempre son armas recicladas. Panamá frecuentemente aparece como punto de introducción de mucho contrabando debido a sus zonas de libre comercio y «flexibles» leyes bancarias. La DEA ha encontrado vínculos entre la Zona Libre de Colón y una banda chino-colombiana involucrado en el tráfico de drogas, personas y rifles de asalto Kalishnikov entre Asia, Sudamérica y los Estados Unidos.^{xiii} Al mismo tiempo el periodismo de investigación ha producido reportes en la prensa panameña sobre un argentino acusado de utilizar a Panamá como base de operaciones para el tráfico de armas hacia Croacia, Bosnia y Ecuador entre 1991-1995.^{xiv}

En la costa atlántica de Costa Rica los traficantes han dado AK-47s a campesinos para proteger las plantaciones de marihuana.^{xv} En la ciudad de Guatemala, la policía ha documentado la existencia de 17 bandas armadas vinculadas con el narcotráfico. El gobierno guatemalteco, actualmente mantiene 280 demandas contra comerciantes legítimos de armas por vender armas a traficantes.^{xvi}

También sabemos que existen sindicatos de crimen organizado formados por excombatientes y militares que operan en el Triángulo del Norte (Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua) que participan en narcotráfico, secuestros,

xi Reuters, «Investigan tráfico de armas desde Centroamérica para Zapatistas», *La Nación Digital*, San José, 26 mayo 1998.

xii Entrevista con personal del proyecto de desminado de la OEA en Guatemala, septiembre 1998.

xiii ACAN-EFE, «Agentes acaban red de narcos, traficantes de armas e indocumentados», *La Prensa*, ciudad de Panamá, 3 agosto 1999.

xiv Herasto Reyes y Aristides Cajar Páez, «Documentos comprometedores», *La Prensa*, ciudad de Panamá, 6 octubre 1998.

xv Irene Vizcaino, «Narcos toman a Talamanca», *La Nación Digital*, San José, 8 abril 1998.

xvi Ramón Hernández, «Prosigue el cierre de armerías», *Prensa Libre*, ciudad de Guatemala, 1 abril 1998

extorsión y asaltos de bancos. Se necesita una buena cantidad de armas pequeñas y municiones para mantener estas empresas. La mayoría de las drogas van hacia los EEUU a través de México. Es natural que se paga parcialmente por el servicio de transporte en armas. No obstante, armas de alto calibre son baratas y abundantes dentro de la región y los contratistas probablemente prefieren dinero en efectivo sobre armas. Nuevas armas de fabricación más sofisticada son más caras y no son accesibles a todas las personas involucradas en el tráfico de drogas. A la vez la abundancia de armas y bajos precios en el mercado negro proveen grandes incentivos para la exportación de armas recicladas a otros países del mundo.

Muchas veces la prensa y las autoridades echan la culpa a las maras por el aumento en el tráfico de armas de una manera no justificada. Claro que las maras participan en estas actividades pero no son los líderes intelectuales. Mi experiencia, por medio de observación y entrevistas con integrantes de las diferentes maras, me indica que la mayoría de estos jóvenes son de 13-18 años, usan armas y granadas hechizas y navajas y son demasiado adictos al *crack* como para disponer del poquito de dinero que se necesita para comprar una AK-47.

La seguridad privada

El aumento en el crimen y la violencia en combinación con la debilidad de las fuerzas de seguridad pública bajo nuevos mandos civiles han creado un vacío en la seguridad ciudadana y del sector privado en toda Centroamérica.

Cada banco, edificio, camión y barrio de lujo tiene sus agentes de seguridad privada con armas de alto calibre. Los gobiernos de la región no están preparados, en términos administrativos tanto como legales, para esta industria emergente que en gran parte funciona al borde de la legalidad. Muchos sospechan de la participación de estas empresas en el tráfico de armas por el hecho de que muchos de los dueños y efectivos de estas empresas son militares o ex-militares y compran armas regularmente. Mis conocimientos sobre esta industria se limitan a El Salvador y Guatemala.

En El Salvador el gobierno ha registrado 80 empresas de seguridad privada con 17,000 agentes bajo la Ley de los Servicios de Seguridad, aprobada por la legislatura en 1994.^{xvii} A primera vista, todos los efectivos de dichas empresas tienen que asistir a un curso de cinco días, a un costo de \$50 dólares, administrado por la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP). Hasta enero de 1999, sólo 8,118 agentes de los 17,000 han sido capacitados para ejercer su labor en la ANSP.^{xviii} Una gran parte de las empresas de seguridad privada no llevan inventario del armamento que utilizan para sus labores presentando grandes oportunidades para el tráfico ilegal.

En Guatemala, la situación es aún más grave. El PNUD estima que operan cerca de 200 empresas de seguridad privada en el país y de ellas solamente 30 están registradas. La ley sobre estas empresas aún está pendiente ante la legislatura. En el transcurso, 800 comités armados de vigilancia han sido formados en la capital, la más co-

nocida sigue siendo los Guardianes del Vecindario (GV).^{xix} GV es una ONG que promueve la portación de armas en Guatemala para combatir la delincuencia en las comunidades.

Ya conocemos muy bien las consecuencias de tener a las policías armadas sin suficiente entrenamiento y control sobre sus acciones. Temo que el crecimiento en estas fuerzas privadas aún menos reguladas por el gobierno, trae consecuencias negativas incluyendo también el tráfico ilícito en armas. Además, la cantidad de dinero invertido en estos servicios son recursos no destinados a la inversión en la tecnología, los recursos humanos y el mercadeo, inversiones que tendrán mayores beneficios para la sociedad en general. Es preocupante, tanto en Guatemala como en los demás países de la región, esta privatización *de facto* de la seguridad pública. Si no hacen algo al respecto pronto los gobiernos centroamericanos, perderán control total sobre la seguridad ciudadana y los pobres tendrán aún menos acceso al apoyo policial que tienen ahora. Y así, grupos como GV tendrán toda la razón en promover el uso de armas de fuego entre los ciudadanos.

El comercio legal de armas pequeñas

Por todo el mundo, una gran mayoría de las armas pequeñas que circulan una vez fueron producidas o distribuidas de una manera legal y legítima. Estas armas pasan a la ilegalidad por medio del robo, el descuido o una transacción ilegal. Muchas veces una profunda examinación del comercio

xvii «Agencias de seguridad son ilegales», La Prensa Gráfica, San Salvador, 28 octubre 1998.

xviii Elder Gómez, «Podrían cerrar más empresas seguridad», El Diario de Hoy, San Salvador, 18 febrero 1999.

xix PNUD, «Inseguridad ciudadana» (1998).

legal de armas de fuego nos puede ayudar a entender el comercio que se lleva a cabo ilícitamente. He tenido la oportunidad de examinar algunas cifras sobre el comercio de armas dentro de Guatemala. Desde 1991, el Departamento para el Control de Armas y Municiones (DECAM), bajo la jurisdicción del Ministerio de Defensa, ha cerrado 50 negocios de venta de armas por irregularidades.^{xx} Una armería cerrada este año no podía verificar una venta de 629,000 balas a un individuo ocho meses antes. Cuando llegaron al individuo no las tenía, él dijo que las necesitaba para la caza deportiva y para defender su rancho. Para acabar con esa cantidad de municiones en ese plazo de tiempo tendría que disparar 2,568 veces cada día. Este, es solamente un caso entre muchos que demuestran la manipulación del mercado legal de armas.

DECAM mantiene otras estadísticas que son igualmente alarmantes. En 1997, empresas e individuos solicitaron permisos para importar 84,212 armas de fuego. DECAM cedió 20,603 permisos de importación en 1997. De los 20,603 armas importadas 19,588 fueron vendidas. ¿Qué pasó con la demanda para los 60,000 armas que no fueron autorizadas? Las leyes de «oferta y demanda» nos dicen que probablemente entraron al país ilegalmente. Las estadísticas para la importación de municiones son aún más preocupantes. Todo esto nos indica que en Guatemala, como en toda Centroamérica, la gente se está armando fuertemente de la manera más accesible, que sea legal o ilegalmente. Parece que ambos

mercados de armas, legal e ilícito, se retroalimentan creando más demanda para armas de alto calibre en una región con una larga tradición de portación de armas. Ahora, el uso de granadas y rifles de asalto es tan común como ha sido la costumbre de usar pistolas y revólveres.

El control de las armas en posesión de los gobiernos

Es común que los gobiernos se declaran en contra del tráfico y uso de las armas. Sin embargo, son muy esquivos cuando la sociedad civil llama por una auditoría de las armas bajo control gubernamental. Sabemos que hay muchos elementos corruptos (no todos) entre los militares y policías y que las armas muchas veces están almacenadas de una manera no muy segura, y por eso no nos podemos sorprender cuando un militar distribuye armas de una forma ilegal o cuando ladrones penetran a un arsenal de la policía. Hay muchas oportunidades para el mal manejo de las armas pertenecientes al gobierno. Aquí presento algunos ejemplos centroamericanos durante el último año y medio.

En agosto 1998, el Centro de Estudios Estratégicos de Nicaragua (CEEN) detectó a través de un estudio que 700 fusiles AK que el ejército de Nicaragua entregó a productores de la zona de Matagalpa, para que organizaran su autodefensa frente a bandas armadas, no tuvieron el destino previsto.^{xxi} Más bien fueron robados por asaltantes comunes, que se abastecen de municiones en el mercado ilegal. Inicialmente la idea de las autoridades castrenses al

distribuir los armamentos era que las mismas fueran canjeadas por carabinas que tuvieran licencia, con los cuales los productores pudieran respaldar la adquisición de las municiones. No tengo suficiente información sobre este caso para comentar mucho pero me parece una política peligrosa, además de establecer un mal precedente, la distribución de armas a civiles por los militares.

En marzo de 1998 en Costa Rica, un informe del Ministerio de Seguridad Pública registró un faltante de 18,750 proyectiles, calibre nueve milímetros, destinados a un programa de entrenamiento de efectivos de la Segunda Comisaría, pese a que no fueron percutidos durante las respectivas prácticas de tiro al blanco.^{xxii} Aparte del faltante el informe señaló graves deficiencias en el registro de los tiros que ingresaban a la armería de ese cuerpo policial, ausencia de reportes sobre las municiones perdidas y falta de control para determinar sobrantes.

El descuido e irresponsabilidad también contribuye a la entrada de armas de las policías al mercado negro. En diciembre de 1998, en San Salvador, 17 armas del PNC fueron robadas del Departamento de Familia, de la PNC, donde estaban dentro un escritorio.^{xxiii} Además de las 17 armas de equipo policial, los ladrones robaron la del vigilante. Fue la tercera vez en tres meses que armas policiales habían sido extraviadas o robadas dentro de las instalaciones de la PNC.

¿Y qué pasará con las nuevas compras de armas de las agencias de seguridad pública? La PNC de

xx En mayo y septiembre de 1998 el autor se entrevistó con el entonces Director de DECAM, Col. Otto Lavagnino.

xxi Humberto Meza, «Bandidos con armas del Ejército», *La Tribuna*, Managua, 31 agosto 1998.

xxii Ronald Moya Ch., «Municiones perdidas», *La Nación Digital*, 16 marzo 1998.

xxiii Mario Martínez, «Roban 17 armas de agentes de la PNC» *El Diario de Hoy*, San Salvador, 15 diciembre 1998.

Guatemala, actualmente, espera la llegada de 6 mil pistolas Beretta calibre .9mm y 3 mil subametralladoras UZI-SMG.^{xxiv} ¿Están seguros los ciudadanos guatemaltecos y sus representantes en el congreso que estas armas no entrarán al mercado negro?

Conclusión

No he pretendido cubrir todos los factores que contribuyen a la circulación de armas en Centroamérica, mucho menos las causas de la violencia. Sin embargo, todos estamos aquí participando en esta conferencia porque sabemos que existe un gran problema que afecta a todos los países del istmo, el desarrollo socioeconómico no vendrá si persisten los niveles actuales de violencia contra civiles con armas de fuego. Comprendemos que la violencia nunca bajará sin grandes reducciones en la pobreza y mayor justicia social. La gran disponibilidad de armamento de todo tipo en la región imposibilita la realización de las tareas necesarias para avanzar, sin seguridad no hay desarrollo.

Hay muchas cosas que se deben hacer al respecto: recolectar y destruir las armas dejadas por la Guerra Fría, luchar más eficazmente contra la narcoactividad, regular las empresas privadas de seguridad, subrayar los aspectos negativos del comercio legal e irresponsable de las armas de fuego, mejorar la policía y el sistema judicial. Son enormes retos aún bajo condiciones perfectas.

No tengo ninguna receta para resolver estos problemas bajo las condiciones imperfectas que vemos

hoy día. No obstante, me gustaría hacer una recomendación sobre una política que potencialmente podría ser implementada en la región si no en el hemisferio. Tiene que ver con la capacidad de la policía. Y antes de elaborar, quisiera defender a los policías centroamericanos un poco. Tengo diez años de estar visitando Centroamérica regularmente tres de los cuales pasé en Honduras y El Salvador. Voy a tomar el ejemplo de El Salvador.

En 1989, la Policía Nacional (PN) era el enemigo de casi todos los salvadoreños. Ahora, pese a todos sus defectos, fallos y abusos, tengo que decirles que la PNC es una institución mucho mejor que su antecesor. Creo que el caso es similar en todos los países donde estamos viendo la transición de mando militar a civil en las fuerzas de seguridad pública. Estas nuevas fuerzas policiales empiezan con el mínimo de entrenamiento y tienen que combatir una delincuencia, mejor armada y sin precedente histórico, y no deben usar las mismas técnicas opresivas de antes. Parece que los ciudadanos tanto como la comunidad internacional les han puesto las normas de evaluación de *Wall Street*. Esperamos resultados en el primer trimestre o vendemos nuestras acciones, en este caso, compramos seguridad privada o pagamos escuadrones de la muerte para que resuelvan los «problemas». No quiero librar a los policías ni los políticos de sus responsabilidades en cuanto a la seguridad ciudadana sino concienciarnos sobre nuestra responsabilidad como investigadores, donantes y ONG de no criticar a estas agencias a no ser que tengamos alguna alternativa más que la

privatización entera de la seguridad.

Mi propuesta es una micro-propuesta en comparación con los temas que estamos tocando aquí y tiene algo que ver con un tema que vamos a tratar más tarde en esta conferencia: la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados.^{xxv} No quiero hablar de los artículos de esta convención cuando alguien mejor calificado lo hará más tarde, sino proponer que la examinemos con el propósito de ver que se puede hacer en cuanto al último factor que discutí en mi presentación, el control de las armas en posesión del Estado. Si hay tanto abuso y descuido de las fuerzas de seguridad sobre sus arsenales y depósitos de armas cómo podemos esperar responsabilidad en esta área por parte de la sociedad civil. Yo creo que el texto de esta Convención permitiría el fortalecimiento de los sistemas de almacenaje de armas en poder de los Estados centroamericanos y destrucción de muchas de las armas decomisadas por estas mismas autoridades, de hecho estoy seguro que lo permite. Sé que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está muy involucrado en los financiamientos para la reforma del sector de seguridad en la región y se da cuenta cada día más del impacto que las armas tiene sobre el desarrollo.

¿Entonces qué podemos hacer nosotros sobre este asunto como participantes en la sociedad civil? Primero, podemos presionar nuestros propios gobiernos a que ratifiquen la Convención Interamericana y que la implementen. Segundo, de-

xxiv Danilo Valladares, «Licitación: Fransalva y GIR venderán armas para PNC», *Prensa Libre*, ciudad de Guatemala, 10 diciembre 1998.

xxv Se puede encontrar el texto de dicha convención en la página web de la OEA <http://www.oas.org/En/prog/juridico/spanish/tmateria.html#A>

bemos explorar las posibilidades de financiamiento de parte del BID y otros donantes haciendo inversiones en este rubro. Tercero, como investigadores, ONG y ciudadanos comunes podemos apoyar a nuestros Ministerios de Seguridad Pública y cuerpos policiales para que tomen acciones positivas e incrementarlas hacia un mayor manejo de las armas.

En casi todos los lugares que visito, inclusive a los barrios marginales de Estados Unidos, cuando hablo de proyectos y alternativas para combatir la violencia la gente dice que no se puede porque las

policías son los peores de todos. Sin una confianza en la policía, las alternativas a la violencia y armamentismo son pocas. Pero si seguimos con este paradigma de pensamiento, y quedamos conformes con la situación tal como está y no aprovechamos del aumento en el diálogo sobre este tema, los convenios que buscan reducir el impacto de las armas en nuestras vidas diarias y los recursos disponibles para hacer algo; sería mejor que siguiéramos el modelo neoliberal puro y privatizáramos la seguridad pública de un solo golpe.